Imprimir

Una nueva salida en falso y una jugada perversa y en contra de los sectores sociales más vulnerables se produjo el 11 de diciembre en el Congreso de la República, en la sesión conjunta de las Comisiones III y IV de Senado y Cámara de Representantes, en la que se hundió el Proyecto de Ley de financiamiento presentado por el presidente Gustavo Petro. Lo que ocurrió no fue nada distinto a lo que se esperaba en un Congreso cuya mayoría está en cabeza de los partidos de la oposición y que no ha hecho otra cosa que establecer un bloqueo sistemático a las políticas de cambio que ha tratado de poner en curso este Gobierno. Las bancadas del Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Conservador y el Partido Liberal, con la anuencia también de algunos integrantes del Partido Verde, cerraron, una vez más, el camino por el que se pretendía avanzar hacia un sistema de tributación más progresivo, que era lo que se buscaba con el llamado a que los sectores de más altos ingresos hicieran un mayor esfuerzo tributario y contribuyeran de esta manera a cerrar la enormes brechas de desigualdad que en todos los niveles aún persisten en Colombia.

El resultado es que algunos de los programas sociales, que son los que están en la base del cambio que el país necesita, quedarán desfinanciados. De nuevo se salió con las suyas la Derecha y una parte de ese Centro desteñido, que pretenden que con ello van a seguir ganando en su propósito de desprestigiar y de lograr que nada le funcione a la coalición progresista que gobierna hoy en Colombia, creyendo que de esa manera abonan el camino que los llevará a recuperar el poder en 2026.

Lo cierto es que su ansia destructiva y la saña que muestran en contra de esa parte de la población que sí está convencida de la necesidad de los cambios les pueden pasar factura y llevarlos a perder por partida doble en las próximas elecciones. Pues si algo ha ocurrido es que a la ciudadanía le ha ido quedando claro que no basta ganar la presidencia y que es imperativo que los partidos y sectores sociales alternativos conquisten también las mayorías en el próximo Congreso. Es un gran aprendizaje saber que nada se logra con un presidente chantajeado y maniatado por unas élites y sus representaciones partidistas, que se niegan a salir del estado de confort que les ha permitido mantener sus ambiciones particulares por encima de los de las mayorías nacionales.

Una vez más ha quedado demostrado que los sectores que más demandan atención: los desempleados, las amas de casa, los sin pensión, los de pensiones pírricas, los campesinos, los indígenas, los afrocolombianos, los jóvenes que ni pudieron continuar sus estudios ni tienen una oportunidad laboral, etc., no están debida y suficientemente representados en una instancia de tanto significado para la democracia como es el Congreso de la República. Por el contrario, se sigue legislando mayoritariamente en contra de sus intereses, lo que exige una reconfiguración más drástica del mapa de representaciones, que hoy continua en cabeza de las viejas maquinarias partidistas, los partidos Liberal y Conservador, y sus nuevas configuraciones: Centro Democrático, Cambio Radical, Partido de la U, que son, en esencia, vino viejo en odres nuevos.

La manera como se ha querido afectar al gobierno bloqueando su acceso a recursos y su disposición para atender gastos que socialmente se consideran prioritarios no tiene justificación. El país ha mostrado un desempeño económico satisfactorio en estos dos últimos años. La pobreza ha disminuido, la inflación ha caído sustancialmente, el desempleo ha cedido, la tasa de cambio se ha mantenido estable y se ha cumplido con el pago de la deuda externa. Tendremos un cierre de año con crecimiento positivo y un 2025 que augura todavía mejores resultados. Todo esto es reconocido por Tirios y Troyanos. Justo es entonces permitir que también se avance en materia de políticas redistributivas, que fue precisamente a lo que se le puso el palo en la rueda en la sesión del 11 de diciembre en las sesiones conjuntas de Cámara y Senado.

No gratuitamente la economía colombiana fue reconocida como la sexta de mejor desempeño entre los países de la OCDE en 2024 por la revista de The Economist, por encima incluso de países como Israel, Suiza, Corea del Sur, Suecia, Países Bajos, Estados Unidos y Alemania. Es también el único país de Suramérica que aparece entre los diez primeros de la lista. Son lugares que nunca se habían ocupado y que dan cuenta del esfuerzo serio y la actitud responsable que ha tenido el Gobierno, luego del lamentable estado en que la dejó la administración anterior y pese a que ha tenido que trasegar en medio de una muy difícil coyuntura internacional.

Gustavo Petro está demostrando que es posible apropiar políticas que lleven hacia una economía en cada vez mejores niveles de estabilidad y equilibrio, que avance a su vez hacia mejores indicadores de equidad, sin necesidad de sacrificar a ninguno de los sectores sociales, en especial a aquellos que están en peores condiciones de vulnerabilidad.

Contrasta lo anterior con lo que ha venido ocurriendo, por ejemplo, en Argentina, en donde si bien el gobierno de Javier Milei ha logrado bajar la inflación y disminuir el gasto público, lo ha hecho a unos costos sociales enormes y muy onerosos para la democracia, que más temprano que tarde le pasarán factura a su gobierno y en su conjunto a la sociedad argentina. Baste con decir que solo en el primer semestre de 2024, comparado con el mismo semestre de 2023, la pobreza en Argentina se elevó en cerca de trece puntos porcentuales y que aún su economía se mantiene en recesión.

Nada que sorprenda cuando los logros de Milei se han obtenido a costa del cierre de dependencias oficiales, entre ellas algunos ministerios, el recorte de la nómina y los salarios de los trabajadores públicos, la disminución de las mesadas pensionales, la paralización de obras públicas y el recorte de subsidios que atendían necesidades de los sectores más empobrecidos.

Adicionalmente, y contrario a lo que se vaticinaba, el manejo de la economía y la defensa de la responsabilidad social del Estado se ha hecho en el marco del pleno respeto y acogimiento al Estado de Derecho y las normas institucionales. Nada ha habido que desconozca o atente contra el equilibrio de poderes y que no pase por las instancias que el fuero y el debate público exigen a la hora de tramitar las reformas. Justamente es ahí donde ha estado el nudo gordiano del que se han valido los defensores a ultranza de un establecimiento que mantiene los amarres y los vicios de antaño, configurados a la medida de quienes se siguen resistiendo a que se pongan en cuestión sus privilegios.

Vendrá un año muy difícil por el golpe que los partidos tradicionales le han dado a la iniciativa del gobierno, que tendrá que ver cómo jugársela para no ceder en su propósito de atender las necesidades de los sectores más vulnerables y seguir adelante para que se

pueda hacer efectiva la implementación de sus propuestas.

Habrá que pensar muy bien entonces la decisión de voto para Congreso y Presidencia de la República en 2026, pues la única manera de seguir avanzando en los cambios es que se avance también en la reconfiguración del mapa político, no solo en el Congreso y el ejecutivo, que de suyo sería ya un gran logro, sino en general en el conjunto de la geografía y el mapa político nacional. Hay que terminar de convencerse de que estamos en una transición y que esto apenas está comenzando.

Orlando Ortiz Medina, Economista-Magister en Estudios políticos

Foto tomada de: La Silla Vacía